

## Justificante de firma de documento

Fecha de generación: 29/06/2015 19:14

Nombre del documento: Resolución 2149

### Relación de firmantes

Datos del firmante	Grafo de firma manual	Fecha de firma	Información de firma
ANGELINA TRIGO PORTELA		29/06/2015 07:12	Firma

Este documento es un justificante de firma que permite recuperar el archivo de firma digital original (el único con validez legal) introduciendo el código CSV ubicado en el margen izquierdo en la siguiente dirección: <https://sedempr.gob.es/es/sede/csv>



Con fecha 13 de mayo de 2015 tuvo entrada en Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Presidencia-Presidencia del Gobierno, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud de [REDACTED] que quedó registrada con el número 002149:

“A efectos de esta Ley de Transparencia, ¿los autónomos son considerados personas físicas o jurídicas? Ya que de ser considerados personas físicas no estarían obligados. 2.- Las personas jurídicas, que no tengan página web ¿Qué mecanismo han de seguir para dar publicidad a las subvenciones que han recibido? Gracias de antemano.

Con fecha 29 de mayo de 2015 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, la Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración considera que lo que plantea el solicitante no es una solicitud de acceso a la información en los términos del artículo 13 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, sino que lo que plantea es una consulta sobre la aplicación de la norma a determinados colectivos y sobre la forma de hacerla efectiva.

En este sentido, el artículo 38.2 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la función de adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley.

Del mismo modo, el Real decreto 919/2014, de 31 de octubre, que aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señala que el Presidente del Consejo es el órgano competente para adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el reglamento que desarrolle dicha Ley o en el Estatuto.

De conformidad con lo señalado corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la interpretación de la ley en los puntos que detalla en su solicitud.

Por ello le comunico que, con esta misma fecha se da traslado de su petición al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de conformidad en con lo señalado en los párrafos anteriores, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución.